



NUE 18-D-2020 (RG)

**XXXX XXXX en contra de XXXX XXXX y XXXX XXXX oficial de información de la
Municipalidad de Aguilares
Resolución Definitiva**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas y un minuto del doce de octubre de dos mil veintiuno.

Descripción del caso:

A. El presente procedimiento sancionador fue promovido por **XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX** en contra de **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX**, ex jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), por el supuesto cometimiento de la infracción muy grave establecida en el literal e) del Art. 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), consistente en: *“Negarse a entregar información solicitada, sin la debida justificación”*; y, en contra de **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX**, por el supuesto cometimiento de la infracción grave establecida en el literal a) del Art. 76 de la LAIP, consistente en: *“Actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conformes a esta ley”*; ambos de la **Municipalidad de Aguilares**.

Los hechos en que el denunciante fundamenta las infracciones atribuidas a los denunciados, derivan de la resolución emitida por la oficial de información el 6 de junio de 2020, mediante la cual resolvió denegar la información requerida por el denunciante, consistente en: *“Las listas de compras realizadas desde el primero de enero del presente año hasta el día 21 de junio del año en curso. Para cada compra, se pide el nombre del proveedor, la descripción de lo que se adquirió, la fecha en la que se adjudicó la compra, el número de la orden de compras, el código o identificador de la compra (de haberlo), la modalidad de la compra (Libre gestión, contratación directa, licitación pública o cualquier otra, de haberla), el número o código identificador de la orden de compra respectiva, y si*

esta se financió de fondos provenientes del FOPROMID o de fondos ordinarios del presupuesto de la institución. En formato CSV o archivo EXCEL; Copia de todas las órdenes de compra emitidas por la institución de la cual es oficial de información, desde el 1 de enero del 2018 hasta el 10 de junio del mismo año, en formato PDF. Listado de todas las consultorías contratadas por la institución de la cual usted es oficial de información, incluyendo el nombre completo de cada consultoría; el concepto o motivo de la consultoría, los montos que se le entregaron en concepto de pago durante cada mes de cada año entre los años 2017 2018, 2019 y el 1 de enero y el 21 de junio del 2020, en formato CSV o archivo EXCEL; Listado de personas que recibieron dinero con cargo a los objetos específicos 56301, 56302, 56303, 56304, 56305 (donaciones) de parte de la entidad del Estado de la cual usted es oficial de información, incluyendo el nombre completo de cada una de estas, el motivo de la transferencia y el monto recibido, para los años 2017, 2018 y 2019, en formato CSV o archivo EXCEL”.

Ello en atención a la respuesta remitida por **XXXXX XXXXX** en el informe suscrito el 3 de julio de 2020, mediante el cual señaló que la UACI no posee la información. No obstante, indicó las unidades que la poseen. En ese sentido, el denunciante concretiza que según lo sostenido por la oficial de información en dicha resolución, el ex jefe de la UACI de la **Municipalidad**, no justificó de forma suficiente su negativa de no entregar la información requerida. Aunado a ello, manifestó que la serie de “impedimentos” o “dificultades” expuestas por el denunciado en el referido informe no tienen fundamento válido a su criterio.

Respecto a la conducta atribuida a la oficial de información de la **Municipalidad**, señaló que la denunciada actuó con negligencia en la sustanciación de su solicitud, debido a que no realizó las gestiones correspondientes al darle trámite. Específicamente, porque de lo planteado por el jefe UACI, debió advertir que para atender el requerimiento del solicitante era necesaria la intervención de diversas unidades generadoras (Tesorería, Contabilidad, Concejo Municipal, Financiera Institucional) y **XXXXX XXXXXXXX** no efectuó diligencia alguna con las precitadas, sino que se limitó a trasladar lo manifestado por **XXXXXX XXXXXX**, resultando en la denegatoria del acceso a la información requerida.

B. En ese contexto, este Instituto admitió la denuncia presentada por el ciudadano **XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX**, por la supuesta comisión de las infracciones antes mencionadas

y se designó al Comisionado Ricardo José Gómez Guerrero, para instruir el procedimiento y someter un proyecto de resolución.

De igual forma, en plena observancia y respeto al Derecho de Defensa y Audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de la LAIP, se le corrió traslado a la parte denunciada para que rindiera su informe justificativo.

En el informe de defensa, **xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx** en lo medular, manifestó que no es cierto que haya negado la información requerida, debido a que la misma no se encuentra en poder de la UACI, puesto que es la unidad de Contabilidad quien se encarga de archivar las órdenes de compra, por lo que su respuesta fue orientada a señalar que la UACI no es la unidad que resguarda dicha información, no a negar la entrega de la misma.

El indiciado, continuó manifestando que respecto a los fondos de FOPROMID, la **Municipalidad de Aguilares** no ha realizado compras de bienes y/o servicios financiados con dichos fondos. Asimismo, señaló que la oficial de información actuó con negligencia al no trasladar el requerimiento a las unidades de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, quienes se encargan de gestionar los pagos y de archivar las órdenes de compras. Aunado a ello, expresó que en el momento en que se recibió la solicitud de información, se encontraba incapacitado, y para tales efectos adjuntó copia de la incapacidad médica.

En consecuencia, solicitó que se desestimen las pretensiones en su contra, se establezca que no ha cometido la infracción atribuida y se tengan por incorporados al procedimiento como elementos probatorios, los documentos siguientes: a) copia de informe emitido por su persona el 3 de julio de 2020, dirigido al Concejo Municipal de Aguilares, en donde, se mencionan algunos aspectos relacionados con la solicitud de información del denunciante; y b) copia de constancia de incapacidad médica a su nombre.

Por su parte, **xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx** en su informe, manifestó que trasladó el requerimiento de información a la UACI, por considerar que era la unidad encargada del resguardo de la información solicitada. Al respecto, menciona que se recibió respuesta de la UACI en el noveno día del plazo de respuesta; razón por la cual, se le dificultó remitir la gestión a otras unidades. Asimismo, agregó que debido a la pandemia de covid-19, varias unidades de la **Municipalidad** se encontraban en cuarentena.

Unido a ello, señaló que si bien es cierto en el año 2019 se nombró a un encargado de la Unidad de Archivo Institucional, el mismo no ha tenido el manejo correspondiente, situación que dificulta las gestiones de sus funciones como oficial de información, en la localización de la información.

Posteriormente, el día 13 de septiembre del presente año, remitió vía correo electrónico, para que se tengan por incorporados al procedimiento como elementos probatorios, los documentos siguientes: a) acuerdo de nombramiento de encargada de activo fijo y archivo; b) informe de encargada de archivo institucional; c) informe de trabajo sobre situación del archivo institucional; y, d) informe de recursos humanos.

C. El 16 de septiembre del año en curso, se desarrolló la audiencia oral con la comparecencia de los denunciados, y en representación de la parte denunciante, compareció **xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx**, en calidad de representante del ciudadano **xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx**, actuación que acredita mediante escrito suscrito por **xxxxxx xxxxxx**, con base a lo previsto en los Arts. 67 y 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

Durante la fase probatoria de la audiencia, la parte denunciante manifestó que no ofrecería elementos para ser incorporados como tal, distintos a los que obran en el expediente. Por su parte, el denunciado expresó que no ofrecería elementos probatorios distintos a los aportados previo a esta audiencia. En esa línea, la denunciada expuso que no aportaría prueba distinta a la aportada previamente.

Respecto a la prueba aportada por las partes, el Pleno deliberó sobre esta y con base a lo establecido en los Arts. 317 al 320 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), resolvió -por unanimidad- admitirla por considerar que es útil y pertinente al presente procedimiento.

En fase de alegatos, el denunciado reiteró el contenido de lo expuesto en su informe de defensa. De igual forma, la denunciada reafirmó lo manifestado en su informe de defensa, agregando que, su gestión en el diligenciamiento de la solicitud de información del denunciante, se vio dificultada por la particular situación que se suscitó, es decir, por la pandemia de covid-19, ya que varias unidades de la **Municipalidad** no estaban laborando,

además, indicó que al no tener un espacio adecuado del archivo, se le complicó poder ubicar lo requerido.

Por su parte, xxxxxx xxxxxxx se centró en hacer una contraargumentación de lo contenido en los informes de defensa de los denunciados, señalando que si bien, se deduce que las actuaciones de ambos indiciados no fueron efectuadas con dolo, si se presume que actuaron con negligencia. Unido a ello, expuso una serie de sugerencias que debieron realizar ambos servidores públicos. Por consiguiente, considera que se cumplen todos los elementos habilitantes para desarrollar el presente procedimiento administrativo sancionador, culminando su intervención con la solicitud de que se sancione al ex jefe de la UACI y a la oficial de información.

Análisis del caso:

Establecido lo anterior, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **I)** Breves consideraciones sobre la potestad sancionatoria del Estado y del principio de legalidad, como principio que rige el ejercicio de dicha facultad por parte de este Instituto; **II)** Breves consideraciones sobre la carga probatoria en los procesos administrativos con relación al principio de presunción de inocencia; y, **III)** valoración probatoria de la documentación adjuntada en el proceso.

I. La potestad sancionadora del Estado, conocida como *ius puniendi*, y concebida como la capacidad estatal de ejercer un control social coercitivo sobre actos ilícitos, se manifiesta en la aplicación de las leyes por los tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional, y en la actuación de la Administración Pública al imponer sanciones a las conductas calificadas como infracciones por el ordenamiento jurídica. Esta materialización del *ius puniendi* en el campo administrativo se denomina potestad sancionadora de la Administración¹.

Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha expresado en reiteradas ocasiones que la potestad sancionadora de la Administración Pública puede definirse como

¹ Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 68-2008 pronunciada a las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintiuno de enero de dos mil once.

“aquella que le compete para imponer correcciones a los ciudadanos o administrados, por actos de éstos contrarios al ordenamiento jurídico”².

En esa línea, la jurisprudencia³ también establece que el principio de legalidad en el ámbito sancionador, constituye una exigencia de seguridad jurídica que no sólo requiere el conocimiento previo de los delitos o infracciones y de las penas o sanciones, sino que además constituye una garantía política hacia el individuo de que no puede ser sometido a penas o sanciones que no hayan sido establecidas previamente, evitando así los abusos de poder.

Es así, que el mencionado principio trae aparejadas implicaciones para la interpretación y aplicación de la LAIP, en el sentido que establece condiciones para la imposición de sanciones por infracciones a la ley, tales como: i) que una ley describa la infracción y su punición; ii) que la ley sea anterior al hecho; iii) que la ley sea precisa en su lenguaje descriptivo con relación a la construcción de la infracción y precisa en el lenguaje normativo de las consecuencias que resulten de su cometimiento; y, iv) que se evite comprender supuestos que no se enmarquen dentro de su tenor.

Por consiguiente, este Instituto con base en el Art. 14 de la Constitución -Cn- relacionado al Art. 58 letra “e” de la LAIP, puede intervenir punitivamente en la esfera jurídica de los servidores públicos que provoquen una lesión o daño a los derechos que garantiza la mencionada ley, considerados estos como derechos fundamentales de los administrados, siempre que tales comportamientos se encuentren tipificados en el referido cuerpo normativo como infracciones plausibles acreedoras de una sanción de carácter pecuniario.

De modo que la potestad sancionadora de este Instituto está limitada a las infracciones que se cometan a la LAIP, ello con la finalidad de corregir o sancionar conductas al margen de su correcto cumplimiento, entendiéndose que se ha provocado una lesión o daño al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP). Es decir, que con base al principio de legalidad, el Instituto no puede conocer de infracciones e imponer sanciones distintas a las tipificadas en los Arts. 76 y 77 de la LAIP.

² Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 95-2011, pronunciada a las quince horas y dos minutos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

³ Sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de amparo con referencia 117-2003, pronunciada a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del día quince de junio de dos mil cuatro.

II. En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones otorgadas por las partes, es decir, constituye una actividad a instancia de parte que tiene como finalidad la comprobación de los hechos controvertidos en el *litigio*; y es contemplada en el derecho común como un derecho y a la vez como una carga.

Se ha entendido generalmente que la carga de probar los hechos constitutivos de infracción administrativa le corresponde al sujeto actor. En relación al tema de la prueba, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha considerado que: *“Si bien este instituto jurídico opera en los diversos procesos, el mismo guarda diferentes connotaciones de conformidad a la materia que se trate; así, cuando hace su efecto en materia administrativa, por regla general, su aplicación actúa conforme al estado de inocencia del investigado⁴”*.

Igualmente, la jurisprudencia⁵ en reiteradas ocasiones ha sostenido que el derecho a la presunción de inocencia dentro del procedimiento administrativo sancionador, implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción administrativa recae sobre quien sostiene la imputación de haberse cometido un ilícito -en este caso, el denunciante-.

Asimismo, determina que *“luego de establecida la tesis incriminatoria, se traslada la verificación de los hechos al administrado en razón del ejercicio de su derecho de defensa, y de este modo, puede aportar toda la prueba de descargo con la que refute la hipótesis planteada por la administración y así desvirtuar posibles señalamientos, sin que ello signifique una obligación procesal, pero si en una medida de contraposición a la teoría de la administración, que además garantiza su actividad probatoria en el desarrollo de una investigación⁶”*.

Además, ha planteado que, *“las principales consecuencias del estado de inocencia se presentan en dos ámbitos: las posibilidades de restricción de derechos dentro del proceso o procedimiento y las exigencias probatorias de una eventual decisión sancionadora. Primero, los derechos de una persona libre o inocente no pueden ser limitados por medidas que, de acuerdo a las circunstancias, constituyan o se asemejen a penas o sanciones anticipadas, lo*

⁴ Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 210-2008, de las catorce horas veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

⁵ Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 306-A-2004, pronunciada a las catorce horas con treinta y seis minutos del veintinueve de agosto de dos mil ocho.

⁶ Ibidem.

que representa un límite a las medidas cautelares y a las formas de tratamiento del supuesto infractor de parte de las autoridades. Segundo, ya que la inocencia no necesita prueba, el sujeto de la imputación no tiene que probar dicha condición, aunque, por eso mismo, la culpabilidad sí debe ser probada. Dado que el supuesto infractor no necesita probar su inocencia y, lógicamente, no le interesa probar su culpabilidad, la carga de probar la imputación corresponde a quien acusa⁷”.

Entonces, es un hecho que la aplicación del principio de presunción de inocencia es esencial en todo procedimiento sancionador, sin perjuicio de algún matiz particular, en el supuesto de que es la expresión procesal o procedimental del derecho de libertad inherente a toda persona (Art. 2 inc. 1 Cn.), es decir, que cuando al sujeto se le atribuye un delito o una infracción, su situación antes del procedimiento se protege mediante una calidad o condición establecida por la ley, que a partir de la imputación y durante el procedimiento, debe ser aceptada como verdad inicial, provisional o interina, que por ello no necesita ser demostrada. Por tanto, queda claro que la carga probatoria en el caso que amerita, le corresponde al sujeto activo, es decir, al denunciante, por ser quien atribuye la comisión de una conducta típica que podría afectar la esfera jurídica de los sujetos pasivos -denunciados-.

III. En cuanto, a los elementos probatorios que obran en este procedimiento administrativo sancionador, se constituyen como prueba documental reconocida por el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), que regula lo referido al ámbito probatorio en los procedimientos que tramita la Administración Pública, de acuerdo al Art. 106 de la LPA -norma supletoria al caso de mérito con base al Art. 102 de la LAIP-.

Cabe recalcar que la prueba se encuentra regida por los principios de pertinencia, idoneidad, conducencia y utilidad. Estos principios representan una limitación al principio de libertad de la prueba; sin embargo, son sumamente necesarios, pues ello significa que no se debe focalizar recursos en la práctica o reproducción de medios que por sí mismos o por su contenido, no sirvan en absoluto para los fines propuestos por ser claramente impertinentes.

En ese contexto, el CPCM contempla dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: *la pertinencia y utilidad*. En cuanto a la

⁷ Sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 94-2013, pronunciada a las trece horas con cincuenta y seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince.

pertinencia, el Art. 318 del CPCM establece que no debe admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso. Respecto a la utilidad, el Art. 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte innecesaria para comprobar los hechos controvertidos.

En ese sentido, debe tomarse en cuenta que durante el procedimiento, no se ha impugnado la autenticidad de los elementos propuestos como prueba, por ninguna de las partes. En consecuencia, la valoración de los elementos que se enuncian a continuación deberá realizarse bajo las reglas establecidas en la sección primera del capítulo IV, del CPCM en relación con el Art. 416 del mismo cuerpo normativo. Dichos elementos se enuncian a continuación:

1. El ciudadano **xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx**, en su escrito de denuncia ofreció como elementos de prueba: a) copia simple del correo electrónico remitido al oficial de información; b) copia simple de la respuesta emitida por el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Municipalidad de Aguilares; y, c) copia simple de la resolución emitida por el oficial de información de la Municipalidad de Aguilares.

De los elementos citados, se advierte que efectivamente existió una solicitud de información interpuesta por el denunciante, y que dentro del trámite del mismo, intervinieron los ahora denunciados en su calidad de oficial de información y jefe UACI, respectivamente.

2. Unido a ello, al momento de rendir el informe de defensa, el denunciado señor **xxxxxx xxxxxx**, aportó como elemento probatorio la documentación siguiente: a) copia de informe emitido por su persona el 3 de julio de 2020, dirigido al Concejo Municipal de Aguilares, en donde, se mencionan algunos aspectos relacionados con la solicitud de información del denunciante; y, b) copia de constancia de incapacidad médica a su nombre.

Respecto a la documentación antes descrita, se apercibe que el denunciado proporcionó una respuesta dentro del plazo legal establecido, relacionada con la solicitud de información realizada por **xxxxxx xxxxx**. Además, con la constancia de incapacidad médica se evidencia que efectivamente en el momento en que se diligenció la referida solicitud,

XXXXXX XXXXXX se encontraba padeciendo covid-19, motivo que le dificultó brindar la respuesta con anterioridad a la fecha en que fue emitida, estando dentro del plazo para ello.

3. En igual forma, la denunciada XXXXX XXXXX, remitió la siguiente documentación para ser incorporada al presente procedimiento como prueba: a) acuerdo de nombramiento de encargada de activo fijo y archivo; b) informe de encargada de archivo institucional; c) informe de trabajo sobre situación del archivo institucional; y, d) informe de recursos humanos.

Al analizar el contenido de la prueba de descargo remitida por la oficial de información, se logra fijar que la **Municipalidad** no cuenta con un espacio adecuado para funcionamiento del archivo institucional, no obstante, existe a la fecha un proyecto para efectuar su mejora; situación que entorpeció el oportuno diligenciamiento de la solicitud, sumado al hecho de que en ese momento fueron varias unidades del ente las que se vieron afectadas por la pandemia, razón que los obligó a reducir el personal que labora en la **Municipalidad**.

Ahora bien, en relación a los elementos de prueba presentados por las partes, valorados conforme a lo dispuesto en el Art. 106 de la LPA relacionado al Art. 416 del CPCM, se establece que los elementos probatorios ofrecidos por los denunciados constituyen prueba de descargo. En ese sentido, no es posible determinar de forma efectiva y fehaciente el cometimiento de las conductas típicas atribuidas a los denunciados; dado que, con el informe suscrito por el ex jefe de la UACI y la resolución solo se logra evidenciar que hubo una respuesta en tiempo, lo cual pudo dilucidarse mediante una vía menos gravosa como el recurso de apelación, por las causales establecidas en el Art. 82 y 83 de la LAIP.

Tal afirmación, se fija con base a lo expuesto en el romano II del apartado “Análisis del caso” de esta resolución, pues en vista de que la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, la documentación ofrecida es insuficiente para demostrar la culpabilidad de los denunciados. Además, en la audiencia oral, la parte denunciante no aportó más instrumentos probatorios a fin de robustecer su acusación.

Unido a ello, con la prueba de descargo presentada por la parte denunciada, se logró evidenciar que en el momento en que se diligenció la solicitud de información, hubo factores

ajenos a la voluntad de los indiciados que dificultaron un diligenciamiento óptimo. Lo anterior es así, en virtud que el procedimiento sancionatorio que este Instituto realiza y que se encuentra regulado en los Arts. 89 de la LAIP, 150 y siguientes de la LPA, tienen el propósito de identificar y definir la responsabilidad en la que puedan recaer los servidores públicos, con base a las infracciones dispuestas en el Art. 76 de la LAIP.

En consecuencia, por las razones expuesta y con base al principio de culpabilidad, que proscribe la imposición de sanciones por la existencia de meros resultados, y que a su vez exige la voluntariedad o negligencia del actor en el cometimiento de infracciones, es conducente absolver al ex jefe de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucional, señor **xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx**, y a la oficial de información **xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx**, ambos de la **Municipalidad de Aguilares**.

Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base en los artículos 6 y 85 de la Cn., 58 letras “a” y “e”, 76 letra “e” de las infracciones muy graves y letra “a” de las infracciones graves, 96 y 102 de la LAIP; 139 números 4 y 5 de la LPA, 78, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto resuelve:

a) Declarar que **xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx**, no incurrió en la comisión de la conducta tipificada en el artículo 76 letra e) de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), del apartado de las infracciones muy graves, consistente en: *“negarse a entregar información solicitada, sin debida justificación”*.

b) Declarar que **xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx**, no incurrió en la comisión de la conducta tipificada en el artículo 76 letra a) de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), del apartado de las infracciones graves, consistente en: *“Actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley”*.

c) Absolver a **xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx** y **xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx**, ex Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y Oficial de Información,

